



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: LUZ MERCEDES ESCOBAR GIRALDO  
Demandados: COLPENSIONES y PROTECCIÓN S. A.  
Radicado: 05001 31 05 012 2020 00172 01  
Sentencia: S-014

### **AUTO:**

En atención a la Escritura Pública No. 3377 del 02 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a COLPENSIONES a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S. A. S., se le reconoce personería como apoderada judicial a la Dra. VANESSA ACEVEDO ESPINOSA, con T. P. No. 270.020 del C. S. de la J.

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la AFP PROTECCIÓN S. A., en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el día 23 de mayo de 2022. Así mismo se conocerá del asunto en grado de CONSULTA en favor de COLPENSIONES. (Ley 1149 de 2007, art. 14, inc. 3º).

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada

previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

LUZ MERCEDES ESCOBAR GIRALDO demandó a PROTECCIÓN S. A. y a COLPENSIONES, pretendiendo lo siguiente:

*"a). Su despacho declarará que el acto de traslado del régimen de prima media con prestación definida (ISS) al de ahorro individual de PROTECCIÓN S. A., efectuado por mi mandante, es nulo y/o ineficaz y que como tal, tiene derecho a trasladarse al régimen de prima media con prestación definida que administra COLPENSIONES.*

*b) Como consecuencia de la anterior declaración, se condenará a las demandadas que autoricen el traslado de la demandante a COLPENSIONES (régimen de prima media con prestación definida) y a PROTECCIÓN S. A. el traslado de los aportes que haya efectuado a dicho fondo la demandante con los respectivos rendimientos e intereses. Igualmente, ordenará a COLPENSIONES que la pensione una vez se cumpla la edad respectiva.*

*c) Costas del proceso".*

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones que ha laborado al servicio de varias empresas en la ciudad de Medellín y que como tal estuvo afiliada al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (hoy COLPENSIONES) hasta el mes de noviembre de 1994, fecha para la cual ya tenía cotizadas un total de 382 semanas. Que a partir de dicha data se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, sin contar con la suficiente información que avalara dicha decisión. Que en la actualidad se encuentra afiliada en PROTECCIÓN S. A. Que, con posterioridad a ese traslado, ha solicitado tanto a COLPENSIONES como a PROTECCIÓN S. A., el retorno al RPMPD sin que haya recibido respuesta positiva en ese sentido. Que los asesores de PROTECCIÓN S. A. no le brindaron la información debida acerca de las graves

consecuencias del traslado, indicando al respecto que el fondo privado se limitó a informarle que se pensionaría anticipadamente, inclusive antes de la edad mínima exigida en el RPMPD, y con una mesada pensional más alta que la que obtendría si continuaba en el ISS. Que tampoco le brindaron la asesoría necesaria previo al cumplimiento de los 10 años anteriores a la edad mínima requerida para obtener la pensión de vejez. Que tampoco le suministraron información referente al saldo que debía tener en su cuenta de ahorro individual al fin de obtener una pensión anticipada, por lo que considera que fue inducida a error al momento de efectuar el traslado de régimen de pensiones, y en consecuencia el mismo debe ser declarado nulo o ineficaz.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Al contestar, PROTECCIÓN S. A. admite que la demandante efectuó su traslado de régimen pensional el 8 de noviembre de 1994 con destino a PROTECCIÓN S. A. de conformidad con el formulario de afiliación suscrito válidamente por la actora, sin embargo, niega el hecho de que no se le haya brindado la información requerida, pues al momento del traslado la administradora le brindó una asesoría amplia, correcta, clara, comprensible y suficiente sobre todos los aspectos del RAIS, como lo son: la construcción de un capital en una cuenta de ahorro individual donde se depositan mes a mes sus aportes. Tampoco admite el hecho de que no le hayan brindado re-asesoría previo al cumplimiento de los 10 años anteriores a la edad mínima requerida, pues indica que el 23 de enero de 2015, el fondo la contactó para explicarle nuevamente las condiciones de su pensión en los 2 regímenes y se le indicó la prohibición de traslado traída por la Ley 797 de 2003. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y en su defensa propuso las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de

devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y la de inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

COLPENSIONES por su parte indica que no le constan los hechos de la demanda por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento, que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso a las pretensiones y en su defensa propuso las excepciones de: inexistencia de la ineficacia en el traslado de régimen, devolución de aportes debidamente indexados, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar los intereses de mora, buena fe de COLPENSIONES, prescripción y la de imposibilidad de condena en costas.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 23 de mayo de 2022, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

**“PRIMERO:** DECLARAR la INEFICACIA de la afiliación de la señora LUZ MERCEDES ESCOBAR GIRALDO identificada con la C.C. 43.665.314, al régimen de ahorro individual con solidaridad en el marco de la afiliación adelantada por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROTECCIÓN S. A. entendiéndose para todos los efectos afiliada sin solución de continuidad en el RPMCD dirigida en la actualidad por la ADMINISTRADORA COLOMBIA DE PENSIONES-COLPENSIONES.

**SEGUNDO:** CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROTECCIÓN S. A. representada legalmente por el doctor JUAN DAVID CORREA SOLÓRZANO o por quien haga sus veces, a que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, traslade a ADMINISTRADORA COLOMBIA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE, el valor de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros de la señora LUZ MERCEDES ESCOBAR GIRALDO; de igual modo debe trasladar lo descontado por concepto de gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexado

con cargo a sus propios recursos. A la par se dispone que, al momento de cumplir la orden, los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.

**TERCERO:** ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES EICE., representada legalmente por el doctor JUAN MIGUEL VILLA LORA, o por quien haga sus veces, a reactivar la afiliación de la señora LUZ MERCEDES ESCOBAR GIRALDO, al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad y recibir los mencionados valores e integrarlos al fondo común que administra, y que, las semanas acreditadas por la AFP PROTECCIÓN S.A., se refleje en su historia laboral.

**CUARTO:** DECLARAR infundada las excepciones de prescripción y compensación.

**QUINTO:** CONDENAR en costas a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROTECCIÓN S.A., se fijan agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

Sin costas, ni agencias en derecho a cargo de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

**SEXTO:** ADVERTIR, que de no ser apelada la presente providencia se remitirá el proceso a la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN para que se surta el grado jurisdiccional de consulta."

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de PROTECCIÓN S. A. interpuso recurso de apelación en lo que tiene que ver con la condena que se le hace de trasladar a COLPENSIONES lo que en su momento se descontó por gastos de administración y seguros previsionales, teniendo en cuenta que los gastos de administración son un recurso económico autorizado desde la Ley 100 de 1993, donde se faculta a los fondos privados a realizar una deducción de un porcentaje sobre el valor del aporte que realizan los afiliados al sistema general de pensiones. Que este descuento de los gastos de administración se hace tanto en el RAIS como en el RPMPD, por lo

que, si la afiliada hubiese continuado en el RPMPD este descuento también se habría dado, y por esta razón el fondo privado tiene derecho a conservar estos gastos como una acreencia a su favor. Que además, porque estos gastos de administración se traducen en los rendimientos que ya fueron ordenados devolver a Colpensiones y que como lo manifestó la Juez, son mayores a los que hubiese tenido de haber continuado en el RPMPD, que por tanto, estos gastos de administración favorecieron a la demandante y que así se puede evidenciar en la cuenta de ahorro individual, y que por ello obtendrá una mesada pensional mayor por el simple hecho de manifestar que existió una omisión en la información al momento de efectuarse el traslado de régimen.

En cuanto al seguro previsional indica que desde que la demandante suscribió el formulario de afiliación, esto es en el mes de noviembre de 1994, el fondo privado adquirió la obligación de contratar a un tercero de buena fe, en este caso las aseguradoras, para que entrara a cubrir las mesadas pensionales en caso de existir un siniestro como son la invalidez o muerte, lo que estuvo cubierto durante todo el tiempo a la demandante. Por lo anterior, solicita se revoque de manera parcial la sentencia emitida por la Juez de primera instancia.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

Dentro del término del traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la apoderada de COLPENSIONES presenta alegatos de conclusión, solicitando que en aras de garantizar el balance probatorio y con ello el debido proceso, acuda estrictamente a las reglas de la carga de la prueba para definir el caso concreto y proceda a revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar, desestimar las pretensiones de la demanda. Indica también que en el evento en que se opte por acceder a las pretensiones de la demanda, se ordene a la Administradora del Régimen de Ahorro Individual, para que, a favor de Colpensiones, realice la devolución integral de las cotizaciones

efectuadas por la parte demandante, sin descuento alguno, durante la permanencia en el RAIS, precisando los conceptos a reintegrarse y un término perentorio para para el reintegro de los recursos.

### **CONSIDERACIONES:**

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por PROTECCIÓN S. A y por COLPENSIONES en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* La señora LUZ MERCEDES ESCOBAR GIRALDO nació el 06 de febrero de 1968; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones allí a partir del 01 de noviembre de 1968; y *iii)* el 08 de noviembre de 1994 suscribió formulario de traslado ante PROTECCIÓN S. A., entidad a la cual se encuentra actualmente vinculada.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la

economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993<sup>1</sup>, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

---

<sup>1</sup> Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 *“ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero”*



Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 09 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. Nº 31.989 de 2008:

*"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."*

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- i)* El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- ii)* El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- iii)* Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- iv)* No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la parte actora, respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio su afiliación al Régimen de Ahorro Individual a través de PROTECCIÓN S. A., en el mes de noviembre del año 1994, simplemente expresó que para dicha data laboraba en el Banco Industrial Colombiano de la ciudad de Medellín, que tanto a ella como a otros compañeros les hicieron una reunión grupal en la que asesores de PROTECCIÓN S. A. les dijeron

que se debían trasladar a dicho fondo porque el ISS se iba a acabar, y que de no trasladarse los aportes que ya había realizado se podían perder. Que para ese momento no tenía conocimiento exacto de cuantas semanas tenía cotizadas, que no recuerda si le hablaron de rendimientos, beneficiarios o información alguna acerca de la posibilidad de realizar aportes voluntarios. Que se motivó para realizar el traslado porque le indicaron que ese fondo era muy rentable, que pertenecía al grupo y que eso le dio seguridad. Indica además que previo a cumplir los 47 años de edad le realizaron una asesoría en la que le indicaron básicamente que como no tenía compañero permanente la diferencia en la mesada pensional que obtendría en el régimen de ahorro individual con solidaridad con respecto a la mesada que percibiría en el régimen de prima media con prestación definida sería mínima y que en virtud de ello decidió permanecer en PROTECCIÓN S. A.

De esto no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

### **Conceptos a devolver.**

De otro lado, en cuanto a la devolución de dineros distintos a los aportes obligatorios, tales como cuotas de administración, seguros previsionales, porcentaje de garantía de pensión mínima u otros conceptos, basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto las cosas vuelve a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

En tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL4964-2018, SL2877-2020, SL5595-2021 o SL1637-2022, lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)”*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la*

*encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."*

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será confirmada.

Y no sobra añadir que no resulta procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

*"En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."*

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el día 23 de mayo de 2022.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5a204253d36d71aaeecd6524d90d8d6962b07f5d5d228adf2bf60def966f3dd7**

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**